COLOMBIA >

Servicios públicos tendrían cambios a partir de julio, debido a medida del Gobierno con subsidios y comisiones

El Gobierno de Gustavo Petro planea presentar al Congreso de la República el 20 de julio de 2025 un nuevo proyecto de ley que reformaría el régimen de los servicios públicos domiciliarios. La propuesta, anunciada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, busca, entre otros aspectos, ajustar la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), además de establecer mecanismos para garantizar el consumo básico de energía y reducir las tarifas eléctricas.

El anuncio del ministro ocurre en un momento donde sectores empresariales y gremiales manifestaron preocupaciones respecto al enfoque del Gobierno. Según el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco), Camilo Sánchez, persisten dudas sobre la viabilidad de la reforma y también sobre su alcance.

Superintendente de Servicios Públicos no participa

Sánchez advirtió que, aunque se espera la presentación del proyecto dentro del presente año legislativo, podría quedar archivado por falta de consenso entre las partes involucradas. **“No veo que vaya a ser tramitado porque el superintendente de Servicios Públicos (Libardo Márquez) no está participando abiertamente.** No se reúne con los gremios, no se reúne con las empresas y no existe ninguna mesa de concertación para el proceso”, aseguró.

está participando abiertamente. No se reúne con los gremios, no se reúne con las empresas y no existe ninguna mesa de concertación para el proceso”, aseguró.

Asimismo, el dirigente gremial señaló que las propuestas centradas en la reducción de tarifas podrían ser contraproducentes para el sector. En sus palabras: “Lo que están buscando algunos es a través de una ley bajar tarifas, eso sería el peor error de la historia, porque por eso funcionó muy bien la ley 142 y 143. Aquí lo que estamos viendo es la fijación de equivocarse poniendo la disminución de las tarifas, y eso sería gravísimo”.

Ante esto, el también presidente del Consejo Gremial sugirió que **la reforma debería priorizar la incorporación de avances tecnológicos, tales como sistemas de medición más eficientes,** y establecer reglas claras que atraigan inversión hacia el sector.

Asimismo, solicitó revisar las normativas bajo las que operan los entes reguladores, como la Creg y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para garantizar un mejor funcionamiento del sector.

A pesar de las críticas, el proyecto avanza en su fase preparatoria. Según informó el Ministerio de Minas y Energía, en la actualidad se encuentra bajo estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El cronograma legislativo indica que, de ser radicado, el proyecto debería ser debatido en la Comisión Quinta del Senado antes de pasar a la Cámara de Representantes. **El proceso requerirá tanto la aprobación en las respectivas comisiones como en las plenarias de ambas cámaras, además de una eventual conciliación bicameral para su sanción presidencial.**